

NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1163
27 de noviembre de 1974

ESPAÑOL
Original: FRANCES/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
31º período de sesiones

INFORMACION PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1159 (XLI) DEL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL RELATIVA A LA COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES REGIONALES QUE SE OCUPAN DE DERECHOS HUMANOS

Nota del Secretario General

En su 41º período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1159 (XLI) 1/ relativa a la cooperación con las organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan de derechos humanos. Con arreglo a lo dispuesto en esta resolución, el Consejo, deseando utilizar toda la información y experiencia disponibles con el fin de promover la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en beneficio de todos sin distinción de raza, sexo, color o religión, invitó al Secretario General, entre otras cosas, a organizar el intercambio de información en materias relativas a derechos humanos entre la Comisión y el Consejo de Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Arabes y otras organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan especialmente de derechos humanos.

La presente nota contiene una comunicación de fecha 18 de noviembre de 1974 remitida por el Consejo de Europa en respuesta a la invitación del Secretario General de que se enviara información relacionada con el intercambio previsto en la resolución.

1/ Se aprobó esta resolución en la 1445ª sesión plenaria del Consejo, el 5 de agosto de 1966.

Comunicación dirigida a la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas sobre la labor realizada por el
Consejo de Europa en materia de derechos humanos en 1974

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION		3
I. Aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos	1 - 4	4
II. Actividades de la Comisión Europea de Derechos Humanos	5 - 17	5
III. Actividades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	18 - 20	10
IV. Actividades del Comité de Ministros del Consejo de Europa en lo que respecta a la aplicación de la Convención Europea sobre Derechos Humanos ..	21 - 24	13
V. Otras actividades del Comité de Ministros del Consejo de Europa en lo que respecta a los derechos humanos	25 - 30	16
VI. La Carta Social Europea	31	26
VII. Asamblea Consultiva del Consejo de Europa	32 - 33	29
VIII. Publicaciones	34	32

INTRODUCCION

En respuesta a la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, hecha de conformidad con los términos de la resolución 1159 (XLI) del Consejo Económico y Social, del 5 de agosto de 1966, el Consejo de Europa preparó para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comunicaciones sobre la labor realizada en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973 en materia de derechos humanos. La comunicación sobre 1968 se distribuyó a la Comisión con la signatura E/CN.4/L.1042/Add.2. Iba a continuación del informe del Consejo de Europa a la Conferencia de Teherán (documento A/CONF.32/L.9), en el que se resumía la labor del Consejo en esta esfera hasta fines de 1967. La comunicación sobre 1969 se distribuyó con la signatura E/CN.4/L.1117/Add.1, la correspondiente a 1970 como E/CN.4/L.1057/Add.1, la relativa a 1971 como E/CN.4/L.1089/Add.1, la de 1972 como E/CN.4/1120 y la de 1973 como E/CN.4/1139.

De conformidad con una nueva solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa ha preparado esta otra comunicación acerca de sus actividades en materia de derechos humanos en 1974.

I. APLICACION DE LA CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

1. El 3 de mayo de 1974, Francia ratificó la Convención Europea y el Primero, el Tercero, el Cuarto y el Quinto protocolos, con lo que se elevó a 16 1/ el número de Estados Partes en estos instrumentos. El número de Estados Partes en el Segundo Protocolo sigue siendo 15.
2. En 1974, Francia reconoció la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Artículo 46 de la Convención), elevando así a 13 el número de países que han reconocido esta cláusula optativa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos (incluso Surinam), Reino Unido, (incluidos 18 territorios de ultramar), República Federal de Alemania y Suecia). El número de países que han reconocido la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos para recibir demandas individuales (Artículo 25 de la Convención) sigue siendo 12.
3. A fines de 1974, el Protocolo N° 4 a la Convención, que garantiza ciertos derechos y libertades distintos de los que ya figuraban en la propia Convención y en el Primer Protocolo 2/, estaba vigente en diez Estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, República Federal de Alemania y Suecia. Esos Gobiernos han aceptado también la jurisdicción obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a las demandas relativas a los derechos garantizados en virtud del Cuarto Protocolo. Nueve de ellos han aceptado también el derecho de petición individual.
4. Al 31 de diciembre de 1974, el Acuerdo Europeo relativo a las personas que participan en los procedimientos entablados ante la Comisión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos que entró en vigor el 17 de abril de 1971 había sido ratificado por nueve Estados (Bélgica, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia).

1/ Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Turquía.

2/ Se refiere a las libertades relacionadas con la prisión por deudas, la circulación y elección de residencia, la expulsión del Estado del cual uno es ciudadano y la prohibición del derecho de entrada en él, y las expulsiones colectivas de extranjeros.

II. ACTIVIDADES DE LA COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

A. Demandas interestatales

a) Irlanda contra el Reino Unido

5. Esta demanda, presentada por el Gobierno de la República de Irlanda contra el Gobierno del Reino Unido y relativa a la situación en Irlanda del Norte, fue declarada admisible en 1972. En 1974 la Comisión ha proseguido el examen del fondo del asunto, que inició en 1973. Las actuaciones de este año han consistido casi exclusivamente en la investigación de los hechos por un grupo de delegados de la Comisión, los cuales escucharon del 25 de febrero al 2 de marzo en Estrasburgo las declaraciones de 13 testigos en relación con las alegaciones del Gobierno irlandés relativas al Artículo 3 de la Convención (Tortura y tratos inhumanos y degradantes). La continuación de la audiencia de los testigos, prevista para el 4 de marzo, tuvo que ser aplazada a causa de las medidas especiales de seguridad pedidas por el Gobierno del Reino Unido. La vista se reanudó el 2 al 11 de mayo en la base aérea militar de Sola, cerca de Stavanger, que había sido puesta a la disposición de la Comisión por el Gobierno noruego; en esta segunda parte prestaron declaración 34 testigos. Otros 14 prestaron también declaración en la base de Sola del 12 al 15 de junio.

Del 22 al 25 de julio volvió a reunirse la Comisión en Estrasburgo para tratar de las alegaciones del Gobierno irlandés relativas al Artículo 14 (Discriminación en cuanto al goce de los derechos garantizados), en combinación con el Artículo 5 (Libertad y seguridad de la persona) y con el Artículo 6 (Proceso justo). En esta ocasión prestaron declaración 5 testigos.

También en Estrasburgo se celebró del 28 al 30 de octubre una nueva audiencia para conocer de las acusaciones del Gobierno demandante en relación con el Artículo 3, oyéndose a 7 testigos.

Si se incluyen los testimonios prestados en 1973, el número total de testigos oídos en relación con este caso se eleva a 78.

b) Chipre contra Turquía

6. El 19 de septiembre de 1974 la Comisión recibió una demanda presentada en nombre del Gobierno de Chipre contra el Gobierno de Turquía. La demanda se refiere a la situación planteada por la intervención turca en Chipre, y en ella se alega la violación de las siguientes disposiciones de la Convención:

- Artículo 1 (Disposición de carácter general)
- Artículo 2 (Derecho a la vida)
- Artículo 3 (Tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes)
- Artículo 4 (Esclavitud, servidumbre y trabajo forzado u obligatorio)
- Artículo 5 (Libertad y seguridad de la persona)

- Artículo 6 (Proceso justo ante un tribunal independiente e imparcial)
- Artículo 8 (Respeto de la vida privada y familiar)
- Artículo 13 (Recurso efectivo ante una autoridad nacional contra la violación de los derechos garantizados por la Convención)
- Artículo 14 (Discriminación en cuanto al goce de esos derechos)

La demanda se refiere también al Artículo 1 del Primer Protocolo (Protección de los bienes) y al Artículo 17 de la Convención, que dispone que ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en el sentido de implicar cualquier derecho de realizar actos tendentes a la destrucción de los derechos y libertades reconocidos en la propia Convención, o a limitaciones de tales derechos y libertades más amplias de las previstas en la misma.

El Gobierno turco fue inmediatamente invitado a presentar por escrito sus observaciones sobre la admisibilidad de la demanda. La Comisión pidió también al Gobierno demandante que facilitara más detalles sobre sus alegaciones.

B. Demandas individuales

7. Desde el 1º de enero hasta el 8 de noviembre de 1974, se presentaron a la Comisión 410 demandas individuales. Durante el mismo período, la Comisión estudió la admisibilidad de unas 300 demandas, de las que cuatro fueron declaradas efectivamente admisibles.

a) Ingrid Brückmann contra la República Federal de Alemania

8. La demandante, una joven de 17 años, huyó de Berlín oriental en 1972 para refugiarse en Berlín occidental, donde confesó que había asesinado a su padre y fue detenida. En agosto de 1973, el Tribunal de Apelación del Berlín occidental autorizó su entrega a las autoridades de Alemania oriental.

En mayo de 1974 la demanda fue declarada admisible, entre otros puntos, en lo relativo a las alegaciones de la demandante sobre el Artículo 3 (Tratos inhumanos o degradantes) y el Artículo 5 (Libertad y seguridad de la persona).

Sin embargo, desde entonces se ha aprobado una modificación, extensiva a Berlín occidental, de la Ley de asistencia interalemana en asuntos criminales. En virtud de las nuevas disposiciones, la Fiscalía General ha anulado la autorización dada para la entrega de la joven a las autoridades de la Alemania oriental y la demandante está actualmente detenida, en espera de juicio, en Berlín occidental.

b) Handyside contra el Reino Unido

9. El demandante, editor londinense, estaba a punto de publicar un libro titulado The Little Red School Book, traducción inglesa de un original danés, cuando las autoridades británicas confiscaron un gran número de ejemplares, no publicados por lo tanto todavía, y multaron al demandante por estar en posesión de una obra obscena con fines comerciales. Más tarde se publicó una versión revisada, que está actualmente en venta en el Reino Unido.

El Sr. Handyside denunciaba ante la Comisión las medidas adoptadas contra el The Little Red School Book, que a su juicio eran contrarias, además de a otras disposiciones, al Artículo 10 de la Convención (Libertad de expresión) y al Artículo 1 del Primer Protocolo (Goce pacífico de los bienes). Su demanda fue declarada admisible en abril de 1974.

c) X contra el Reino Unido

10. Esta demanda se refiere al empleo de penas corporales en la Isla de Man. El demandante, un joven de 18 años, alega haber sido azotado, una vez declarado culpable, en virtud de la Summary Jurisdiction Act 1960 (Isle of Man), que prescribe esa pena para los niños y los jóvenes de sexo masculino.

En julio de 1974 la Comisión declaró admisible la demanda, decidiendo examinar el fondo de las acusaciones del demandante relativas al Artículo 3 (Tratos inhumanos o degradantes) y al Artículo 14 (No discriminación) de la Convención.

d) Hätti contra la República Federal de Alemania

11. El demandante, ya anteriormente condenado varias veces por incesto, protesta contra la duración del nuevo proceso a que está sometido desde 1970, alegando que se ha violado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Convención. Después de facilitar ciertos datos sobre el proceso a petición de la Comisión, el Gobierno de la República Federal de Alemania decidió no hacer observaciones sobre la admisibilidad de la demanda, la cual fue declarada admisible por la Comisión, en octubre de 1974. Sin embargo, la Comisión declaró inadmisibles la alegación del demandante que afirmaba no haber recibido en la prisión tratamiento médico adecuado por una afección ocular grave.

C. Casos de avenencia amistosa entre las partes

12. En 1974 la Comisión logró resolver dos casos mediante avenencia amistosa entre las partes de conformidad con lo previsto en el párrafo b) del Artículo 28 de la Convención:

a) Amekrane contra el Reino Unido

13. El Teniente Coronel Amekrane, de las Fuerzas Aéreas Marroquíes, implicado en un intento frustrado contra la vida del Rey de Marruecos en 1972, había huido a Gibraltar. Después de una breve detención, fue entregado a las autoridades marroquíes, condenado a muerte por un tribunal marroquí y ejecutado en enero de 1973. La demanda presentada por su viuda, que era de nacionalidad alemana, contra el Reino Unido estaba basada en el Artículo 3 (Tratos inhumanos o degradantes), el Artículo 5 (Libertad y seguridad de la persona) y el Artículo 8 (Vida familiar) de la Convención. En virtud de la avenencia amistosa entre las partes, el Gobierno británico, sin admitir ninguna violación de la Convención, pagó a la Sra. Amekrane la suma de 37.500 libras esterlinas.

b) Gussenbauer contra Austria

14. Este caso estaba relacionado con el sistema de asistencia jurídica gratuita, en virtud del cual, el defensor nombrado de oficio no recibe remuneración alguna por sus servicios.

El demandante, abogado de Viena, había sido designado para defender a dos personas en sendos procesos criminales. Alegando que, si se hubiera negado a prestar sus servicios, habría sido sancionado el Sr. Gussenbauer afirmó que se le había obligado a realizar un "trabajo forzado", en el sentido que se da a esta expresión en el Artículo 4 de la Convención. Señaló que ni siquiera se le habían reembolsado enteramente sus gastos. El demandante alegó también discriminación (Artículo 14), ya que la obligación de representar gratuitamente a los clientes se aplicaba sólo a los colegiados, y no a los demás abogados.

Según los términos de la avenencia, el demandante ha obtenido del Gobierno austriaco el reembolso de los gastos que había efectuado en relación con su demanda ante la Comisión. Al confirmar la avenencia, la Comisión tomó nota de una declaración del Gobierno según la cual, al aprobar los reglamentos de los Colegios de abogados austriacos, velaría por una distribución equitativa de los servicios de asistencia jurídica gratuita entre los letrados.

D. Informes preparados de conformidad con el Artículo 31 de la Convención

15. En 1974, la Comisión preparó y aprobó informes finales sobre cinco casos, de los que cuatro fueron sometidos por la Comisión a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: (véase el párrafo 19 infra)

- Tres casos sobre cuestiones sindicales, relacionados sobre todo con la aplicación del Artículo 11 de la Convención (Libertad de reunión y de asociación), a saber: Sindicato Nacional de la Policía Belga contra Bélgica, Lokmannaförbundet contra Suecia, y Schmidt y Dahlström contra Suecia.
- Un caso concerniente al arresto disciplinario en las fuerzas armadas y al procedimiento seguido en tales casos. La cuestión se planteó como resultado de varias demandas individuales presentadas contra los Países Bajos por soldados holandeses y se refiere fundamentalmente al Artículo 5 (Libertad y seguridad de la persona) y al Artículo 6 (Juicio equitativo) de la Convención.

16. En un quinto caso, Kamma contra los Países Bajos, la Comisión preparó un informe de acuerdo con lo previsto en el Artículo 31 de la Convención. En su demanda, el Sr. Kamma, que había sido detenido y encarcelado como sospechoso de extorsión y robo, alegaba que la policía había aprovechado su reclusión para efectuar contra él investigaciones sobre otro delito, pese a no haberse incoado la correspondiente instrucción judicial preliminar.

*

* *

17. Entre las otras demandas individuales examinadas por la Comisión en 1974, cabe mencionar las siguientes:

- Unas 190 demandas individuales relativas a la situación en Irlanda del Norte, de las que la Comisión está ocupándose en relación con la demanda interestatal antes mencionada.

- Las demandas presentadas contra Dinamarca por el Sr. y la Sra. Kjeldsen, el Sr. y la Sra. Madsen y el Sr. y la Sra. Pedersen en relación con la educación sexual obligatoria en las escuelas.
- Varias demandas relativas a la libertad de expresión en la prensa: Geillustreerde Pers N.V. contra los Países Bajos, Sunday Times contra el Reino Unido y Telebiella contra Italia.
- Las demandas de la Srta. Berberich, el Sr. Mahler y otras personas pertenecientes al Grupo "Baader-Meinhof", en relación con su detención y proceso en la República Federal de Alemania.
- La demanda de la Sra. Ilse Hess contra el Reino Unido sobre el encarcelamiento de su marido, el antiguo dirigente nazi Rudolf Hess, recluido en la prisión de Spandau.

III. ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

18. El 7 de mayo de 1974, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia sobre la cuestión de la aplicación del Artículo 50 de la Convención en el caso Neumeister, que concierne a la República de Austria.

En una primera sentencia de 27 de junio de 1968, el Tribunal había decidido:

- por unanimidad, que había habido violación del párrafo 3 del Artículo 5 de la Convención, ya que la prisión preventiva de Neumeister había durado más de lo razonable;
- por cinco votos contra dos, que no había habido violación del párrafo 1 del Artículo 6 de la Convención en cuanto a la duración del procedimiento incoado contra el demandante en 1961;
- por unanimidad, que no había habido violación del párrafo 4 del Artículo 5, ni del párrafo 1 del Artículo 6, de la Convención en cuanto al procedimiento seguido para examinar las solicitudes de libertad provisional presentadas por el demandante.

En septiembre de 1971, Neumeister pidió por conducto de la Comisión que el Tribunal decretara la indemnización de todos los daños materiales y morales que, según afirmaba, había sufrido debido a la duración excesiva de su prisión preventiva. Teniendo en cuenta distintos factores y, en particular, la remisión condicional de la pena que, en ejercicio de su derecho de gracia, había concedido al demandante el Presidente de la República, el Tribunal, en su sentencia del 7 de mayo de 1974, decidió por unanimidad que la República de Austria debía abonar al Sr. Neumeister para el pago de los honorarios de abogado la suma de 30.000 shillings austriacos; el Tribunal desechó, en cambio, por infundadas otras varias reclamaciones del demandante.

/En cuanto a las actividades del Comité de Ministros, véase el párrafo 24 infra.7

19. A principios de octubre, la Comisión Europea de Derechos Humanos sometió a la consideración del Tribunal los cuatro casos siguientes:

- Sindicato Nacional de la Policía Belga;
- Sindicato Sueco de Conductores de Máquinas;
- Schmidt y Dahlström;
- Engel y otros.

Los tres primeros casos se refieren principalmente a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos para la defensa de los propios intereses y a afiliarse a ellos (Artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos).

El caso del Sindicato Nacional de la Policía Belga se inició con una demanda presentada por el Sindicato ante la Comisión el 5 de marzo de 1970. El Sindicato, que había sido establecido para defender los intereses profesionales de todos los miembros de la policía local que representan el 75% aproximadamente de las fuerzas belgas de policía, alega que Bélgica ha violado la Convención al negarse a aceptarlo como uno de los sindicatos más representativos y excluirlo por consiguiente de las consultas con los sindicatos previstas en la legislación belga.

El caso del Sindicato Sueco de Conductores de Máquinas se inició con una demanda presentada ante la Comisión el 6 de julio de 1972. El Sindicato, que tiene unos 1.200 miembros, empleados en los ferrocarriles suecos para el manejo de las locomotoras, alega que la Convención ha sido violada porque la Oficina Nacional de Contratación Colectiva se había negado, a partir de octubre de 1968, a concertar con él un nuevo acuerdo sobre las condiciones de trabajo y de empleo. Esta negativa era consecuencia de la política seguida por la Oficina, de concertar en lo posible acuerdos generales sólo con los cuatro sindicatos principales de Suecia, haciendo extensivas las condiciones de dichos acuerdos a todos los empleados del Gobierno.

El caso Schmidt y Dahlström se inició con una demanda presentada ante la Comisión el 9 de junio de 1972 por el Sr. Schmidt, profesor de la Universidad de Estocolmo, y el Sr. Dahlström, capitán del Ejército sueco. Cada uno de los demandantes es miembro de uno de los cuatro sindicatos principales a que pertenecen los funcionarios suecos. Alegan que la Convención ha sido violada porque el Gobierno les ha negado un aumento retroactivo de sueldo basándose en que pertenecen a sindicatos que participaron en huelgas selectivas en 1971, después de la ruptura de las negociaciones que se estaban celebrando para la firma de un nuevo contrato colectivo.

El caso Engel y otros se basa en cinco demandas presentadas en diciembre de 1971 contra los Países Bajos por los Srs. Engel, van der Wiel, de Wit, Dona y Schul, que estaban entonces haciendo el servicio militar en las fuerzas neerlandesas. Los cinco habían sido castigados por distintos actos contrarios a la disciplina militar; las penas impuestas habían sido de arresto leve, arresto grave, arresto riguroso y traslado a una unidad disciplinaria. Todos ellos recurrieron al Oficial de reclamaciones y luego al Tribunal Supremo de Justicia Militar, que confirmó las sentencias.

Los demandantes alegan la violación de los Artículos 5, 6 y 14 de la Convención, considerando que su castigo constituyó una privación de libertad que, tanto por sí misma, como por el procedimiento seguido para imponerla, era incompatible con el Artículo 5 de la Convención. Por otra parte estiman que el procedimiento seguido por las autoridades militares, incluido el del Tribunal Supremo de Justicia Militar había violado los requisitos del Artículo 6, y su privación de libertad era discriminatoria.

Los Srs. Engel, Dona y Schul denunciaron también la violación en su caso de otros varios artículos de la Convención.

Con arreglo a lo previsto en la misma Convención, se han constituido salas de siete Magistrados para entender de estos casos, dos de los cuales -los relativos al Reino de Suecia- serán considerados por la misma Sala.

20. El 11 y el 12 de octubre se celebraron en Estrasburgo audiencias públicas sobre el caso Golder, que el Gobierno del Reino Unido había sometido a la consideración del Tribunal en septiembre de 1973.

Este caso se inició con una demanda presentada a la Comisión por el Sr. Golder contra el Reino Unido. El Sr. Golder alegaba, entre otras cosas, que la negativa del Secretario del Interior a permitirle, mientras estaba cumpliendo una sentencia de privación de libertad, que consultara a un letrado para incoar un procedimiento civil por

difamación contra un funcionario de prisiones constituía una violación del derecho a recurrir a los tribunales que le reconocía el párrafo 1 del Artículo 6 de la Convención.

La Sala que se había constituido para entender en este caso se declaró incompetente en mayo de 1974, en favor del Tribunal en pleno con arreglo al artículo 48 del reglamento de éste.

IV. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA EN LO QUE RESPECTA
A LA APLICACION DE LA CONVENCION EUROPEA SOBRE DERECHOS HUMANOS

21. En 1974, el Comité de Ministros ejerció en una ocasión las facultades que le confiere el Artículo 32 de la Convención Europea, en relación con el caso conocido con el nombre de "Les Fourons contra Bélgica".

22. Una organización no gubernamental, la "Asociación Regional para la Defensa de las Libertades", presentó el 25 de mayo de 1964, en nombre de 165 cabezas de familia que vivían en la región de Les Fourons, una demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. Los demandantes alegaban que las normas lingüísticas aplicables a la enseñanza en Les Fourons desde 1963 violaban el derecho a la vida de familia, el derecho a la educación y el principio de no discriminación por razón del idioma, protegidos por los Artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos y por el Artículo 2 del Primer Protocolo.

La Comisión Europea de Derechos Humanos declaró admisible la demanda el 15 de diciembre de 1964. No habiendo podido llegarse a la avenencia amistosa prevista en el Artículo 28 de la Convención, la Comisión preparó un informe, que fue transmitido al Comité de Ministros el 27 de mayo de 1971.

Después de examinar el caso, el Comité de Ministros aprobó, el 19 de abril de 1974, la Resolución DH (74) 1, cuyo texto es el siguiente:

RESOLUCION DH (74) 1

(aprobada por el Comité de Ministros el 30 de abril de 1974 en la 231ª
reunión de los suplentes de los Ministros)

Demanda Número 2209/64

"Habitantes de Les Fourons contra Bélgica"

El Comité de Ministros,

A. Teniendo en cuenta el Artículo 32 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (denominada en adelante "la Convención"),

Teniendo en cuenta el informe preparado por la Comisión Europea de Derechos Humanos, de conformidad con el Artículo 31 de la Convención, sobre la demanda presentada el 25 de mayo de 1964 por la "Asociación Regional para la Defensa de las Libertades" en nombre de 165 cabezas de familia que viven en la región de Les Fourons, demanda conocida con el nombre de "Habitantes de Les Fourons contra Bélgica" (Nº 2209/64),

Considerando que el 27 de mayo de 1971 la Comisión transmitió dicho informe al Comité de Ministros y que ha transcurrido ya el plazo de tres meses previsto en el párrafo 1 del Artículo 32 de la Convención sin que el caso haya sido sometido a la consideración del Tribunal en cumplimiento del Artículo 48 de la misma Convención,

B. Considerando que, en su demanda, los demandantes alegan que las normas lingüísticas aplicables a la enseñanza en las localidades de Les Fourons desde 1963 violan los Artículos 8 y 14 de la Convención y el Artículo 2 del Primer Protocolo,

Considerando que la Comisión declaró admisible la demanda el 15 de diciembre de 1964 en lo concerniente a los Artículos 8 y 14 de la Convención y el Artículo 2 del Primer Protocolo,

Considerando que la Comisión, en su informe de 30 de marzo de 1971, estimó por unanimidad que la legislación aplicable a la creación y subvención de las escuelas de lengua francesa en las seis comunas de Les Fourons viola, en el caso de los demandantes, la primera frase del Artículo 2 del Primer Protocolo en relación con el Artículo 14 de la Convención,

Considerando, por otra parte, que la Comisión estimó, por 11 votos contra 1, que la legislación aludida no viola el primer párrafo del Artículo 8 en relación con el Artículo 14 de la Convención,

C. Teniendo en cuenta el memorándum del Gobierno de Bélgica de 7 de enero de 1974,

Habiendo tomado en consideración el hecho de que la revisión de la Constitución efectuada en Bélgica no se terminó, en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el caso actual, hasta el 24 de diciembre de 1970 y de que la puesta en práctica de esas nuevas disposiciones constitucionales ha requerido numerosas medidas de aplicación tales como las leyes de 3, 21 y 26 de julio de 1971,

Habiendo tomado igualmente en consideración el hecho de que la mencionada revisión ha confirmado en particular la existencia de cuatro "regiones lingüísticas", a saber, la región de lengua francesa, la región de lengua holandesa, la región bilingüe de Bruselas-capital y la región de lengua alemana, dando al mismo tiempo reconocimiento constitucional a la existencia de tres "comunidades culturales" - la francesa, la holandesa y la alemana, con ciertas atribuciones propias,

Considerando que, en aplicación de la Real Orden de 10 de mayo de 1973 (Moniteur Belge de 24 de mayo de 1973, pág. 6.477) y de las cuatro Reales Ordenes de 19 de octubre de 1973 (Moniteur Belge de 20 de diciembre de 1973, págs. 14.659 y siguientes), las escuelas de lengua francesa de las seis localidades de la región de Les Fourons que no recibían subvenciones pueden recibirlas en el año escolar de 1973-74, y que al mismo tiempo se ha hecho posible la creación de nuevas escuelas subvencionadas de lengua francesa, escuelas que de hecho se han creado,

D. Votando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 32 de la Convención,

- a) toma nota de la opinión expresada por la Comisión de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo 31 de la Convención;
- b) toma nota de las disposiciones constitucionales, legislativas y administrativas que regulan en Bélgica la cuestión que se examina, y en particular de las Reales Ordenes de 10 de mayo y 19 de octubre de 1973;
- c) decide en consecuencia que no es preciso adoptar ninguna otra medida en relación con este asunto.

23. En 1974, el Comité de Ministros actuó en un caso de conformidad con el Artículo 54 de la Convención Europea que dispone que "la sentencia del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que vigilará su ejecución".

24. En noviembre de 1974, el Comité de Ministros, ejerciendo la función que le confiere el Artículo 54 de la Convención, examinó las medidas adoptadas por el Gobierno de Austria en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Neumeister (véase el párrafo 18 supra).

El Sr. Fritz Neumeister presentó el 12 de julio de 1963 ante la Comisión Europea de Derechos Humanos una demanda contra la República de Austria, denunciando la violación de varias disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos. El demandante alegaba en particular la excesiva duración de su prisión preventiva. El 6 de abril de 1964, la Comisión Europea declaró admisibles tres de las quejas del demandante y, en su informe de 17 de agosto de 1966, estimó que había habido violación del párrafo 3 del Artículo 5 y del párrafo 1 del Artículo 6 de la Convención por cuanto el demandante no había sido procesado, ni su causa había sido juzgada "en un plazo razonable".

El caso fue sometido a la consideración del Tribunal Europeo el 7 de octubre de 1966. En su sentencia de 27 de junio de 1968, el Tribunal, aunque rechazando otras dos quejas del demandante, dictaminó que había habido violación del párrafo 3 del Artículo 5 de la Convención por cuanto la prisión preventiva a que había estado sometido había sido más larga de lo razonable.

En otra sentencia de 7 de mayo de 1974, el Tribunal mantuvo por unanimidad que la petición por el demandante de una justa indemnización era infundada teniendo en cuenta que la República de Austria le iba a abonar una suma de 30.000 schillings para el pago de los honorarios de abogado.

El Comité de Ministros ha tomado nota de que, en cumplimiento de la obligación que le impone el Artículo 53 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Gobierno de Austria ha ejecutado la sentencia del Tribunal de 7 de mayo de 1974.

El Comité de Ministros ha convenido también en que su tarea de vigilar la ejecución de la sentencia del Tribunal, de conformidad con el Artículo 54 de la Convención, ha quedado terminada en este caso.

V. OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA
EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS HUMANOS

- a) El derecho al respeto de la vida privada en cuanto se ve afectado por la prensa y otros medios de información y por los modernos adelantos científicos y tecnológicos.

25. A raíz de la aprobación, por la Asamblea, de la recomendación 509 (1968) sobre los derechos humanos y los modernos adelantos científicos y tecnológicos, y de conformidad con una propuesta del Comité de Expertos en Derechos Humanos, el Comité de Ministros decidió, en abril de 1968, incluir en el Programa Intergubernamental de Trabajo para 1968-1969 el tema siguiente:

"El derecho al respeto de la vida privada en cuanto se ve afectado por:

- a) la prensa y otros medios de información, y
- b) los modernos adelantos científicos y tecnológicos. Estudio de la conveniencia de preparar una recomendación a los Gobiernos."

En vista de los complejos aspectos técnicos de esta materia y de los problemas de derecho civil y penal que podrían plantearse, el Comité de Ministros decidió dar instrucciones a la Secretaría para que incluyera ese tema en los programas del Comité de Expertos en Derechos Humanos, el Comité Europeo de Problemas Criminológicos y el Comité Europeo de Cooperación Jurídica y pidiera a cada uno de esos órganos que examinase los aspectos del problema correspondientes a la esfera de su competencia.

El Comité de Expertos en Derechos Humanos examinó en primer lugar el modo en que el derecho al respeto de la vida privada se ve afectado por los modernos adelantos científicos y tecnológicos. Ese Comité concluyó el examen de ese aspecto del problema y preparó un informe de fecha 9 de octubre de 1970. En la comunicación correspondiente al año 1971 (E/CN.4/L.1089/Add.1) se dio información al respecto.

Por lo que atañe al derecho al respeto de la vida privada en cuanto se ve afectado por la prensa y otros medios de información, el Comité de Expertos aprobó su informe, que fue transmitido por el Comité de Ministros al Comité Europeo de Cooperación Jurídica y al Comité Europeo de Problemas Criminológicos a fin de que lo examinasen al preparar su labor sobre el respeto de la vida privada.

En el informe del Comité de Expertos en Derechos Humanos sobre el derecho a la vida privada en cuanto se ve afectado por la prensa y otros medios de información no se estimó posible ni oportuno definir con precisión el concepto de medios de información. Si en la actualidad los casos de injerencia en la vida privada se producen más probablemente en la prensa, la radiodifusión o la televisión, no pueden pasarse por alto otros medios de revelación y divulgación que presentan peligros análogos para la protección de vida privada.

Al preparar normas destinadas a mantener un justo equilibrio entre el interés de los particulares en la protección de la vida privada, tal como se halla garantizada por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y el interés que representan los medios de información amparados por el artículo 10 de la Convención, debe tenerse en cuenta que los medios de información incluidos normalmente en esa denominación pueden cumplir una función esencial en interés general del público, y que éste tiene derecho a las ventajas de la libre circulación de la información. Al mismo tiempo, es precisamente por su gran difusión por lo que, desde el punto de vista de la protección de la vida privada, tales medios de información presentan peligros que requieren normas especiales.

El principio básico adoptado por el Comité en sus trabajos es que el derecho a la vida privada debe ser respetado tanto por los medios de información como por los particulares y las autoridades públicas.

El Comité estimó necesario centrar su atención, sobre todo, en los diversos usos de la información relativa a la vida privada y en particular en los que son características de los medios de información. Entre esos usos puede figurar la publicación de informaciones y la presentación pública de hechos relativos a la vida privada, con independencia del modo en que se hayan obtenido los datos que se ponen así al alcance del público. En su informe, el Comité estimó que debe considerarse ilícita toda publicación efectuada por los medios de información que constituya una violación de la vida privada.

El Comité sugirió en su informe que el Comité de Ministros recomendará a los gobiernos miembros que propusieran la adopción de normas legales para garantizar una protección eficaz de la vida privada contra la injerencia de los medios de información de conformidad con los principios enunciados en ese informe. No obstante, habida cuenta del carácter especial de los medios de información y de la función de interés público que desempeñan, las soluciones destinadas a evitar la posible injerencia en la vida privada deberían ser examinadas conjuntamente por los gobiernos, como representantes del interés general, y las organizaciones profesionales que representen a los medios de información.

El Comité de Expertos estima que sería conveniente recomendar a los gobiernos miembros que mantengan constantemente en estudio la cuestión de los efectos de los medios de información en lo que se refiere al respeto de la vida privada, mediante contactos regulares con los organismos profesionales que representen a esos medios. Esos contactos serían sobre todo el medio que permitiría hallar de común acuerdo soluciones adecuadas para colmar las lagunas que presenta la legislación en esa esfera.

A nivel europeo, el Comité de Expertos considera igualmente que el problema del respeto de la vida privada, en cuanto se ve afectado por los medios de información, debe mantenerse también constantemente en estudio, a fin de que puedan hallarse finalmente soluciones europeas que tengan en cuenta los posibles peligros que suponen para la vida privada las nuevas modalidades de información, como las video-cassettes y los programas de televisión transmitidos por cable y por satélite.

b) Consejos de prensa

26. En su recomendación 582 (1970), inspirada en los trabajos del Simposio sobre Derechos Humanos y Medios de Información organizado por la Asamblea con la asistencia del Gobierno Federal de Austria y celebrado en Salzburgo del 9 al 12 de septiembre de 1968, la Asamblea pidió al Comité de Ministros que invitara a los Estados miembros que aún no lo hubieran hecho a que alentasen a las organizaciones profesionales a que, con fines de autocontrol, crearan consejos de prensa facultados para entender de los casos de violación de las normas de conducta profesional por órganos de prensa en los respectivos Estados.

En mayo de 1970, después de examinar esa recomendación, el Comité de Ministros decidió "invitar a los Estados miembros que aún no lo hubieran hecho a que alentasen a las organizaciones profesionales a que, con fines de autocontrol, crearan consejos de prensa facultados para entender de los casos de violación de las normas de conducta profesional por órganos de prensa en los respectivos Estados". Asimismo, los Ministros encomendaron al Comité de Expertos de Derechos Humanos que examinase determinadas cuestiones, entre las cuales figuraba... la creación de consejos de prensa aprovechando la experiencia de los países en que ya se hubieran establecido, y que formulase recomendaciones al respecto.

El Comité de Expertos en Derechos Humanos ha presentado al Comité de Ministros su informe sobre la cuestión. Para llevar a cabo la labor que se le había asignado, el Comité reunió ante todo una amplia documentación sobre los consejos de prensa existentes y el modo en que funcionan, especialmente en los Estados miembros del Consejo de Europa.

El Comité observó que, si bien el régimen de los consejos de prensa difiere apreciablemente de un país a otro, su principal característica es la independencia frente a los poderes públicos. De ello se desprende que la responsabilidad por el funcionamiento de los consejos de prensa incumbe fundamentalmente a la prensa misma. Las funciones principales de esos consejos son la defensa de la libertad de prensa y la libertad de información del público, así como la eficaz protección del individuo contra abusos de la prensa. En el ejercicio de esta última función, el consejo de prensa examina las quejas que le presentan los miembros del público contra publicaciones o contra periodistas. Este examen está a cargo del consejo de prensa o de un órgano especializado establecido por éste, y los procedimientos pueden dar lugar a que el consejo de prensa decida dirigir a las publicaciones o periodistas de que se trate una amonestación o una reprimenda, que tendrá aún mayor fuerza ya que se publicará en la prensa.

El Comité de Expertos no estima conveniente que el Consejo de Europa adopte una iniciativa directa para la creación o el desarrollo de consejos de prensa, sobre todo por las siguientes razones:

- Como los consejos de prensa son instituciones profesionales independientes, su establecimiento y desarrollo incumbe en primer lugar a los medios profesionales interesados;

- Como los consejos de prensa son instituciones creadas voluntariamente y constituyen una forma de control libremente aceptada por la profesión misma, no es apropiado que los Estados o las organizaciones intergubernamentales intervengan en esta esfera.

Sin embargo, no debe deducirse de los argumentos enunciados que la existencia de consejos de prensa excluiría la adopción por el Estado de cualquier medida legislativa cuando ésta sea necesaria para la protección del individuo o de la libertad de información y de prensa.

Considerando que los consejos de prensa pueden ser un instrumento útil para conciliar la libertad de prensa con la necesidad de proteger los derechos individuales, el Comité de Expertos propuso que el Consejo de Europa tomase la iniciativa de organizar una conferencia que reuniese a representantes de los consejos de prensa existentes con representantes de los medios profesionales interesados en los Estados miembros del Consejo de Europa. El 26 y el 27 de septiembre de 1974 se celebró en Estocolmo una mesa redonda sobre los consejos de prensa. Esta brindó una oportunidad para efectuar un provechoso cambio de impresiones y de experiencias sobre el funcionamiento de consejos de prensa en países con sistemas jurídicos y tradiciones diferentes.

c) Derechos de las minorías nacionales

27. El Comité de Ministros examinó el informe del Comité de Expertos en Derechos Humanos relativo a los derechos de las minorías nacionales. El Comité de Ministros aprobó la conclusión del Comité de Expertos en Derechos Humanos, según la cual no es necesario desde el punto de vista jurídico recoger la protección de las minorías nacionales en un protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos en el que se enuncien derechos especiales para esas minorías. La Asamblea ha sido informada de esa conclusión y ha recibido el informe del Comité de Expertos en Derechos Humanos.

d) Derecho de respuesta

28. En cumplimiento de la recomendación 582 (1970) de la Asamblea Consultiva y en especial de su párrafo 8, el Comité de Ministros encomendó al Comité de Expertos en Derechos Humanos que estudiase las posibilidades de armonizar las disposiciones de las legislaciones nacionales sobre cuestiones tales como el "derecho de respuesta".

El Comité de Expertos presentó su informe sobre esta cuestión al Comité de Ministros en enero de 1974.

De conformidad con su mandato, el Comité estudió las actuales leyes y prácticas relativas al derecho de respuesta en diferentes países, con ayuda de las contestaciones a un cuestionario preparado al efecto. Esta encuesta reveló que el derecho de respuesta no existía como institución jurídica en todos los Estados miembros del Consejo de Europa, y que incluso en aquellos Estados cuya legislación había establecido ese derecho, las normas que lo regulaban adoptaban tres formas diferentes: o bien autorizaban la rectificación de las informaciones cuya falsedad se alegase y reconocían el derecho de responder a las opiniones expresadas sobre la persona interesada, o bien se limitaban a autorizar la rectificación de tales informaciones o, por último, autorizaban la rectificación de las informaciones, pero estableciendo que el interesado

debía probar su falsedad. En los Estados que no habían instituido el derecho de respuesta propiamente dicho, existían sin embargo otros medios de reparación, que podían ser judiciales, en especial en virtud de las leyes sobre la difamación, o bien profesionales y éticos, con intervención del consejo de prensa; si bien estos otros medios no equivalían necesariamente al derecho de respuesta, cumplían un propósito análogo.

Después de examinar el alcance y el contenido del derecho de respuesta como institución jurídica, el Comité llegó a la conclusión de que era necesario estudiar las posibilidades de una armonización dentro del marco más amplio de las relaciones entre los individuos y la prensa. A este respecto, el Comité estimó que las relaciones entre los individuos y la prensa deberían regularse de modo que los primeros estuvieran protegidos contra ataques injustificados y contra la publicación de informaciones falsas a su respecto. Este principio no sólo debería aplicarse a la prensa escrita, sino también a la radiodifusión, la televisión y a otros medios de información de carácter periódico.

El Comité no considera oportuno preparar un instrumento jurídico sobre las relaciones entre los individuos y la prensa, y sobre el derecho de la respuesta en particular. Las diferencias entre las leyes nacionales y las tradiciones jurídicas de los diferentes Estados miembros del Consejo de Europa son aún demasiado grandes para que exista cualquier posibilidad de armonizar la legislación en esta esfera, y en especial la relativa al derecho de respuesta, en un protocolo de la Convención Europea sobre Derechos Humanos que garantice ese derecho, o incluso en un instrumento jurídico separado. El Comité estima que no sería apropiado incluir en la Convención Europea de Derechos Humanos un principio general semejante al de la Convención Americana, ya que, a su juicio, el derecho de respuesta no es un derecho humano en sentido estricto. Por tales razones, el Comité llegó a la conclusión de que el Comité de Ministros podría hacer una recomendación a los Gobiernos sobre la situación del individuo en relación con la prensa y recomendar al mismo tiempo que los Estados que tengan en estudio la posibilidad de promulgar disposiciones legales sobre el derecho de respuesta configuren jurídicamente ese derecho según las directrices dadas en el apéndice de la recomendación.

En julio de 1974 el Comité de Ministros aprobó sobre esta cuestión la resolución siguiente:

RESOLUCION (74) 26

SOBRE EL DERECHO DE RESPUESTA Y LA SITUACION DEL INDIVIDUO EN RELACION CON LA PRENSA

(aprobada por el Comité de Ministros el 2 de julio de 1974
en la 233ª reunión de los suplentes de los Ministros)

El Comité de Ministros,

Considerando que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia de autoridad pública alguna y sin consideración de fronteras, tal como se establece en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos;

Considerando que, en virtud de la citada disposición, el ejercicio de esa libertad lleva consigo deberes y responsabilidades, en particular relacionados con la protección de la reputación o de los derechos de otras personas;

Considerando conveniente ofrecer al individuo medios adecuados de protección contra la publicación de informaciones que contengan inexactitudes a su respecto, así como un remedio contra la publicación de informaciones, incluidos hechos y opiniones, que constituya una injerencia en su vida privada o un ataque a su dignidad, honor o reputación, ya se transmitan al público por medio de la prensa escrita, la radiodifusión, la televisión, o cualquier otro medio de información de carácter periódico;

Considerando que el público tiene también interés en recibir información de diversas fuentes, lo que le asegura una información completa;

Considerando que a estos efectos deben aplicarse los mismos principios a todos los medios de información, aunque los recursos a disposición del individuo pueden variar según se trate de la prensa escrita, la radiodifusión o la televisión;

Considerando que en la fase actual sólo debe tenerse en cuenta la situación del individuo con respecto a los medios de información de carácter periódico, tales como la prensa y las emisiones de radiodifusión y televisión, y que debe atenderse especialmente a la protección del individuo contra la injerencia en su vida privada o contra los ataques a su honor, dignidad o reputación,

Recomienda a los Gobiernos miembros que, como mínimo, se apliquen a la situación del individuo con respecto a los medios de difusión los principios siguientes:

1. En relación con la información referente a individuos que se publique por cualquier medio, el individuo interesado tendrá una posibilidad efectiva de rectificar, sin demora indebida, los hechos falsos relacionados con él que tenga interés justificado en rectificar debiéndose, en lo posible, dar a la rectificación la misma prominencia que se dio a la publicación original.
2. En relación con la información referente a individuos que se publique por cualquier medio, el individuo interesado tendrá remedios efectivos contra la publicación de hechos y opiniones que constituyan:
 - i) una injerencia en su vida privada, salvo cuando esté justificada por un interés público legítimo y superior, cuando el individuo haya consentido expresa o tácitamente la publicación o cuando, por sus circunstancias, la publicación constituya una práctica generalmente aceptada y no sea contraria a la ley;
 - ii) un ataque a su dignidad, honor o reputación, a menos que la información se publique con el consentimiento expreso o tácito del interesado o se justifique por un interés público legítimo y superior y constituya una crítica justa basada en hechos exactos.
3. Ninguno de los principios antes enunciados se interpretará como una justificación de la censura.

4. En los principios antes enunciados:

- i) el término "individuo" designa todas las personas físicas y jurídicas así como otras entidades, cualquiera que fuere su nacionalidad o lugar de residencia, con exclusión del Estado y de otras entidades públicas;
- ii) la expresión "medio de información" designa todos los medios de comunicación de carácter periódico para la difusión pública de informaciones, tales como la prensa y las emisiones de radiodifusión o televisión;
- iii) la expresión "posibilidad efectiva de rectificar" significa cualquier posibilidad que pueda usarse como medio de reparación, esté o no previsto en la ley, tales como el derecho de rectificación, el derecho de respuesta o la reclamación ante los consejos de prensa;
- iv) el término "remedio" significa una forma de reparación, esté o no previsto en la ley, como las establecidas en las normas jurídicas sobre difamación o las reclamaciones ante los consejos de prensa, a la que todo individuo pueda acudir, sin limitaciones indebidas, como costos excesivos.

5. Los principios enunciados se aplicarán a todos los medios de información sin distinciones. Ello no excluye posibles diferencias en la aplicación de los principios a determinados medios de información, como la radiodifusión y la televisión, en la medida que su diferente naturaleza lo haga necesario o lo justifique.

Recomienda a los Gobiernos miembros que al aprobar legislación sobre el derecho de respuesta, prevean el ejercicio de ese derecho en la prensa, radiodifusión, televisión y cualquier otro medio de difusión periódico, observando las normas mínimas anexas a la presente resolución.

APENDICE

NORMAS MINIMAS RELATIVAS AL DERECHO DE RESPUESTA A LA PRENSA, LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSION Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS PERIODICOS DE DIFUSION

1. Todas las personas físicas o jurídicas, así como otras entidades, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, que hayan sido mencionadas en un diario, revista, emisión de radio o televisión u otro medio de información de carácter periódico y sobre las cuales se hayan comunicado al público hechos que consideren falsos, podrán ejercer el derecho de respuesta a fin de rectificar los hechos que a ellas se refieran.

2. A petición de la persona interesada el medio de información de que se trate estará obligado a publicar la respuesta que esa persona le haya enviado.

3. Con carácter excepcional, puede preverse en la legislación de un país la negativa de un medio de información a publicar las respuestas en los siguientes casos:

- i) cuando la petición de publicación de la respuesta no se haya dirigido en un plazo relativamente breve;
- ii) cuando la longitud de la respuesta exceda de lo necesario para rectificar la información en la que figuraban los hechos cuya falsedad se alegue;
- iii) cuando la respuesta no se limite a una rectificación de los hechos cuya exactitud se impugne;
- iv) cuando la respuesta constituya un delito;
- v) cuando la respuesta se considere contraria a los intereses de un tercero protegidos por la ley;
- vi) cuando el individuo no pueda demostrar la existencia de un interés legítimo.

4. Las respuestas deben publicarse sin demora indebida y debe dárseles, en lo posible, la misma prominencia que se dio a la información en la que figuraban los hechos cuya falsedad se alegue.

5. A fin de salvaguardar el ejercicio efectivo de derecho de respuesta, las leyes nacionales determinarán la persona que representará a la publicación, editorial, emisora de radiodifusión o de televisión o cualquier otro medio de información cuando se trate de pedir la publicación de la respuesta. También se determinará la persona responsable de la publicación de la respuesta, persona que no estará protegida por ninguna inmunidad.

6. Las normas anteriores se aplicarán a todos los medios de información sin distinciones. Ello no excluye posibles diferencias en la aplicación de las normas a determinados medios, como la radiodifusión y la televisión, en la medida que su diferente naturaleza lo haga necesario o lo justifique.

7. Cualquiera controversia sobre la aplicación de las normas anteriores se someterá a un tribunal que estará facultado para ordenar la publicación inmediata de la respuesta.

e) Vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal y vigésimo aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos

29. Teniendo presente la recomendación 715 de la Asamblea referente a los aniversarios mencionados, el Comité de Ministros propuso que su Presidente, junto con el Presidente de la Asamblea, publicara un mensaje para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención Europea de Derechos Humanos; de acuerdo con esa propuesta, el 10 de diciembre de 1973, Día de los Derechos Humanos, se publicó el texto que figura a continuación y que fue firmado también por el Secretario General:

"La comunidad internacional celebra hoy el vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Consejo de Europa participa complacido en esta celebración y se siente orgulloso de haber sido de los primeros que llevaron a la práctica la Declaración Universal al concertar la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta Convención entró en vigor hace veinte años, en 1953. El año de 1973 marca, pues, dos aniversarios.

En la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, el Consejo de Europa dio fuerza de obligaciones jurídicas a diecinueve derechos consagrados en la Declaración Universal. En esa Convención se creó una Comisión Europea y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de esas obligaciones. Por vez primera en la historia de la humanidad, varios Estados convinieron en someter su actuación en esta esfera a un control internacional común.

En un momento en que los países verdaderamente democráticos del mundo constituyen una pequeña minoría y en que la mayor parte de la humanidad se ve privada de los derechos humanos más fundamentales, es especialmente importante que el Consejo de Europa defienda los principios de libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho que, como se declara en su Estatuto, constituyen el fundamento de toda democracia auténtica."

Además, el Comité de Ministros encomendó al Comité de Expertos en Derechos Humanos que siguiera la evolución de la labor de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y formulara cualquier propuesta apropiada para asegurar la coordinación necesaria.

Por lo que se refiere a las propuestas de la Asamblea relativa a la asistencia al Instituto Internacional de Derechos Humanos, el Comité de Ministros decidió conceder una subvención de 120.000 francos franceses con cargo al presupuesto del Consejo para 1974. Convino en examinar nuevamente en una reunión ulterior las diferentes formas de la asistencia al Instituto Internacional de Derechos Humanos, así como la propuesta de la Asamblea de crear un Fondo de Derechos Humanos para facilitar la integración del Instituto en la futura Universidad de las Naciones Unidas.

El Comité de Ministros autorizó la reimpresión del folleto sobre la Convención Europea de Derechos Humanos en el idioma oficial, con cargo a los créditos correspondientes a 1974 para publicaciones comprendidas en el programa de información.

f) Programa del Consejo de Europa a corto y a medio plazo en la esfera general de los derechos humanos - Recomendación 683 (1972)

30. De acuerdo con la recomendación 683 (1972) de la Asamblea, que trata de las medidas que deben adoptarse en relación con las conclusiones de la Conferencia Parlamentaria sobre Derechos Humanos celebrada en Viena del 18 al 20 de octubre de 1971, el Comité de Ministros decidió en 1973:

- i) Pedir al Comité de Expertos en Derechos Humanos que, previa consulta con la Comisión y el Tribunal Europeos de Derechos Humanos, dé su opinión sobre las propuestas anexas a la recomendación 683 relativa a un programa a corto y medio plazo en la esfera general de los derechos humanos;
- ii) Pedir al Secretario General que comunique al Comité de Expertos en Derechos Humanos la opinión de otros comités intergubernamentales de expertos del Consejo de Europa interesados en temas particulares del programa.

Después de un cambio oficial de opiniones con representantes de la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Expertos en Derechos Humanos recibió las observaciones del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, el

Comité Europeo de Problemas Criminológicos, el Comité Social, el Comité Europeo de Salud Pública y el Consejo de Cooperación Cultural. Al aprobar su informe al Comité de Ministros, el Comité de Expertos en Derechos Humanos partió del principio de que debía proponer un programa de trabajo en la esfera general de los derechos humanos para el Consejo de Europa globalmente considerado. Para ello se basó en la recomendación 683 (1972) de la Asamblea.

En octubre de 1974 el Comité de Ministros, después de haber tomado nota del informe del Comité de Expertos en Derechos Humanos, pidió al Secretario General que tuviera en cuenta las propuestas formuladas por este Comité en el proyecto de programa a corto y a medio plazo al preparar el plan a medio plazo de las actividades intergubernamentales del Consejo de Europa, y que presentase propuestas concretas en cuanto a sus prioridades. También pidió al Comité de Expertos que, como parte del programa de trabajo para 1975, estudiara las mejoras necesarias en el mecanismo de aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos.

VI. LA CARTA SOCIAL EUROPEA

31. La Carta Social Europea, que es la contraparte de la Convención de Derechos Humanos en la esfera social, fue firmada el 18 de octubre de 1961 y entró en vigor el 26 de febrero de 1965, después de haber sido ratificada por el Reino Unido, Noruega, Suecia, Irlanda y la República Federal de Alemania. Posteriormente ha sido ratificada por Dinamarca, Italia, Chipre, Austria y Francia.

La naturaleza de los derechos garantizados impone un sistema bastante especial de supervisión basado en la presentación por las Partes Contratantes de informes bienales sobre las cuestiones contempladas por las disposiciones de la Carta que cada una de ellas ha aceptado. Se envían ejemplares de dichos informes a algunas organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores, cuyas observaciones son luego transmitidas al Secretario General del Consejo de Europa. El procedimiento de supervisión consiste en el examen de los informes por un Comité de Expertos Independientes, con la asistencia de un representante de la OIT, y por un Comité Gubernamental. Las conclusiones de los comités se comunican a la Asamblea Consultiva y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. De conformidad con el artículo 29, el Comité de Ministros podrá dirigir todas las recomendaciones que estime necesarias a cada una de las Partes Contratantes.

El primer ciclo de supervisión concluyó el 12 de noviembre de 1971, con la aprobación de la resolución (71) 30, por el Comité de Ministros.

El segundo ciclo concluyó el 29 de mayo de 1974, cuando el Comité de Ministros aprobó la resolución (74) 16, que dice lo siguiente:

"El Comité de Ministros,

Teniendo en cuenta la Carta Social Europea y en especial las disposiciones de su parte IV,

Habiendo tomado nota con satisfacción del segundo informe del Comité Gubernamental que lleva adjuntas las Conclusiones II del Comité de Expertos Independientes, así como de la Opinión Nº 64 de la Asamblea Consultiva sobre el primer informe presentado por el Gobierno de Chipre y los informes presentados por los gobiernos de Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega, República Federal de Alemania, el Reino Unido y Suecia, correspondientes al período 1968-69;

Obrando de conformidad con el artículo 29 de la Carta,

a) Decide transmitir a los gobiernos de dichos Estados las Conclusiones II del Comité de Expertos Independientes, el segundo informe del Comité Gubernamental, así como la Opinión Nº 64 de la Asamblea Consultiva;

b) Señala a la atención de los gobiernos de dichos Estados las observaciones formuladas en los documentos mencionados en el párrafo 1 supra, en especial por lo que se refiere a las medidas necesarias para que su legislación y práctica nacionales recojan las obligaciones derivadas de la Carta."

El tercer ciclo de supervisión cubre los años 1970 y 1971. El Comité de Expertos Independientes completó su labor en 1973 con la aprobación de las "Conclusiones III". Estas fueron examinadas durante 1974 por el Comité Gubernamental que aprobó su informe el 8 de noviembre. De conformidad con el artículo 28 de la Carta, las "Conclusiones III" y el informe del Comité Gubernamental serán transmitidos a la Asamblea Consultiva, la cual los examinará a principios de 1975.

El cuarto ciclo, que abarca los años 1972 y 1973, se inició en 1974. Los informes presentados por las Partes Contratantes son ya objeto de examen por el Comité de Expertos Independientes, cuya labor continuará durante 1975. El primer informe de Francia será presentado en el curso del quinto ciclo.

En sus informes sobre el tercer ciclo, tanto los Expertos Independientes como el Comité Gubernamental estimaron que las Partes Contratantes observaban cada vez más plenamente los compromisos que habían contraído. Señalaron en particular una serie de modificaciones de los sistemas nacionales, impulsadas o influidas por la Carta. Esos ejemplos de progreso práctico ponen de manifiesto la naturaleza dinámica del sistema de supervisión de la Carta.

Entre otros ejemplos, aparte de los mencionados en la comunicación anterior, figuran los siguientes:

- En Suecia, se ha facilitado la renovación del permiso de trabajo después de un año de empleo, y los permisos de residencia, que dan libre acceso al mercado de trabajo, se conceden ahora después de dos años de residencia en lugar de cinco.
- En la República Federal de Alemania, donde, sin acuerdo internacional, no se autoriza por lo general que las familias de los trabajadores extranjeros se reúnan con éstos hasta haber cumplido tres años de residencia, se ha decidido acortar dicho período a un año para los nacionales de otros Estados que hayan ratificado la Carta (párrafo 6 del artículo 19).
- En el Reino Unido, las autoridades de Irlanda del Norte tienen intención de facilitar el acceso de los extranjeros a las viviendas de tipo social (párrafo 4 c) del artículo 19).
- En Irlanda se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para aumentar el plazo de notificación de despido, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 4.
- También Irlanda, está preparando nueva legislación para regular el trabajo de los menores sujetos todavía a la instrucción obligatoria, en todas las ramas de la economía (párrafo 3 del artículo 7). Existe también un proyecto de ley donde se repite prácticamente palabra por palabra las disposiciones del párrafo 6 del artículo 7 que garantiza la inclusión de la capacitación de trabajadores jóvenes en las horas normales de trabajo.

Por último, además de cualesquiera notificaciones por parte de los Estados que ya han firmado la Carta se puede esperar que aumentará el número de compromisos contraídos por las actuales Partes Contratantes, particularmente como resultado de modificaciones introducidas en la legislación nacional. A ese respecto, entre los nuevos métodos propuestos con ocasión de su tercer informe, el Comité Gubernamental plantea la cuestión de las disposiciones para aplicar el artículo 22 de la Carta. Dicho artículo se refiere a los informes sobre las disposiciones que todavía no hayan aceptado las Partes Contratantes.

El mecanismo de supervisión representa además una excelente vía de comunicación entre los expertos gubernamentales de las Partes Contratantes, las organizaciones de trabajadores y empleadores, los expertos independientes, los parlamentarios y el Comité de Ministros. Esta función continua, si bien es difícil de expresar en cifras, no puede menos de contribuir al progreso en la esfera social.

VII. ASAMBLEA CONSULTIVA DEL CONSEJO DE EUROPA

32. En 1974, la Asamblea aprobó los siguientes textos relativos a los derechos humanos y materias conexas.

- Resolución 572 (1974) relativa a un simposio sobre el futuro de las instituciones democráticas en Europa, que dice así:

"La Asamblea,

1. Reafirmando su adhesión a los principios de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley, cuyo respeto es el principal deber que impone el Estatuto a todos los Estados miembros del Consejo de Europa;

2. Convencida de que el Consejo de Europa cumple su misión esencial y eminentemente política de guardián de la democracia en Europa;

3. Considerando que la democracia parlamentaria tradicional parece experimentar una crisis en la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa;

4. Considerando en particular que los parlamentos encuentran cada vez más dificultad para el ejercicio de sus facultades legislativas y de control del ejecutivo;

5. Preocupada por el futuro de la democracia y de las instituciones democráticas en Europa;

6. Considerando la necesidad de adaptar las instituciones democráticas a las necesidades de la sociedad moderna;

7. Teniendo en cuenta los debates del Coloquio sobre "La ciencia y los mecanismos decisivos de la sociedad", celebrado en Estrasburgo en septiembre de 1973 por iniciativa de su Comité de Ciencia y Tecnología, que mostró la necesidad de adaptar las estructuras parlamentarias y gubernamentales a las exigencias de la sociedad tecnológica moderna.

8. Resuelve:

a. Convocar un simposio sobre el futuro de las instituciones democráticas en Europa, en particular por lo que se refiere al control del ejecutivo en las democracias parlamentarias, e invitar a ese simposio a políticos importantes así como a expertos en derecho constitucional, sociología y ciencias políticas;

b. pedir a su Comité de Asuntos Jurídicos que organice ese simposio en estrecha colaboración con el Comité de Asuntos Políticos, el Comité de Cultura y Educación y el Comité de Ciencia y Tecnología, y que presente un informe sobre las conclusiones del simposio."

- Recomendación 741 (1974) sobre la condición jurídica de la mujer, que dice así:

"La Asamblea,

1. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010 (XXVII), proclamó 1975 como "Año Internacional de la Mujer";
2. Recordando su recomendación 504 (1967) sobre la condición política, social y civil de la mujer en Europa;
3. Acogiendo con satisfacción la existencia en el derecho nacional e internacional de normas que prohíben la discriminación por motivos de sexo, en particular el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos;
4. Observando, no obstante, que en ciertos aspectos de nuestras sociedades todavía persiste la discriminación por motivos de sexo y que, si bien con frecuencia se basa en hechos psicológicos, sociales y económicos, está también sancionada por muchas disposiciones jurídicas;
5. Considerando que las cuestiones relativas a la aplicación del principio de no discriminación en esferas tales como la nacionalidad de la mujer casada y los hijos de los matrimonios mixtos, el derecho de familia, la seguridad social de mujeres que no ejercen actividades remuneradas y el derecho del trabajo, deben resolverse a nivel europeo;
6. Acogiendo con satisfacción las numerosas iniciativas y proyectos de reforma que han emprendido en esas esferas el Consejo de Europa y los Estados miembros, así como las Comunidades Europeas;
7. Tomando nota con satisfacción de que el tema seleccionado para la 14ª Conferencia de Ministros Europeos encargados de asuntos de la familia, que habrá de celebrarse en 1975, es "la igualdad del hombre y la mujer; sus consecuencias para la vida familiar; y acción gubernamental";
8. Subrayando al mismo tiempo la importancia que atribuye a la realización práctica de esos diversos proyectos e iniciativas con la máxima eficacia y coordinación;
9. Recordando, en cuanto a la nacionalidad de la mujer casada y de los hijos de matrimonios mixtos, las soluciones propuestas en las recomendaciones 519 (1968), sobre la nacionalidad de la mujer casada, y 696 (1973), sobre ciertos aspectos de la adquisición de la nacionalidad;
10. Considerando, en cuanto al derecho de familia, que ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones con respecto a sus hijos menores y que deben ejercer esos derechos y cumplir esas obligaciones conjuntamente y sólo en interés del hijo;
11. Recordando, en cuanto a la seguridad social de las mujeres que no ejercen actividades remuneradas, que el trabajo del hogar debe considerarse como actividad económica que da derecho inmediato a beneficios de la seguridad social;

12. Considerando que queda todavía mucho por hacer para aplicar el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres, no sólo para trabajo igual sino también para trabajo de igual valor;

13. Recordando asimismo que las disposiciones destinadas a proteger las necesidades especiales de la mujer o suprimir la discriminación contra ella no deben dar lugar a discriminación contra el hombre,

14. Recomienda que el Comité de Ministros del Consejo de Europa:

- i) invite a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que firmen y ratifiquen las convenciones internacionales que contengan disposiciones por las que se prohíba la discriminación por motivos de sexo, y en particular:
 - la Convención de las Naciones Unidas sobre Nacionalidad de la Mujer Casada, de 1957, y
 - la Carta Social Europea;
- ii) prosiga con determinación las diversas actividades relativas a la condición de la mujer incluidas en el Programa de Trabajo de 1973-74 y en el proyecto de programa de trabajo de 1975-76, y procure lograr los objetivos con eficacia y coordinación;
- iii) procure que las diversas reformas legislativas proyectadas en los Estados miembros se basen en principios comunes y den lugar a una armonización considerable de la legislación;
- iv) tenga en cuenta el principio de la no discriminación cuando se le pida que apruebe el proyecto de recomendación sobre seguridad social de la mujer que ejerce actividades no remuneradas, que actualmente está preparando el Comité de Expertos sobre seguridad social;
- v) estudie, en su momento, la posibilidad de ampliar a todos los Estados miembros del Consejo de Europa las disposiciones de la directriz de la Comunidad, actualmente en proceso de redacción, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros respecto a la aplicación del principio de la igualdad de remuneración para trabajadores y trabajadoras."

33. El Comité de Asuntos Jurídicos de la Asamblea organizó, los días 18 y 19 de abril de 1974, una reunión de Ombudsmen y de Comisionados Parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de Europa con miembros del Comité de Asuntos Jurídicos.

Esta fue la primera oportunidad para reunirse y examinar conjuntamente materias de interés común. Los debates giraron en torno a los tres temas siguientes del programa de la reunión:

- Intercambio de información y experiencias entre las personas que ocupan los cargos de ombudsman, comisionado parlamentario o "mediador";
- Examen de la conveniencia de nombrar un ombudsman europeo;
- Examen de la conveniencia de nombrar a una persona independiente que ayude a los demandantes a presentar sus demandas a la Comisión Europea de Derechos Humanos.

VIII. PUBLICACIONES

34.- En 1974 se publicó el 15º volumen del Yearbook of the European Convention on Human Rights, que abarca el año 1972. El anuario contiene información general sobre la Convención, la Comisión y el Tribunal, ciertas decisiones de la Comisión sobre admisibilidad de reclamaciones, decisiones del Comité de Ministros y fallos del Tribunal, así como información sobre la aplicación de la Convención en el derecho nacional de los tribunales de ciertos Estados miembros.

La Secretaría de la Comisión Europea de Derechos Humanos editó en 1974 una publicación de su serie "Case-Law Topics" titulada "Human Rights and their Limitations".

La secretaría del Tribunal dispuso la publicación en 1974:

- de la decisión de 7 de mayo de 1974 sobre la cuestión de la aplicación del artículo 50 de la Convención en el caso Neumeister (serie A, nº 17);
- de las memorias y documentos relativos a la interpretación de la decisión dictada el 22 de junio de 1972 en el caso Ringeisen (serie B, nº 14);
- de una nueva edición del reglamento del Tribunal.
